



Asamblea General

Distr. general
24 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 60º período de sesiones
(2 a 6 de mayo de 2011)**

Nº 3/2011 (Egipto)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de enero de 2011

Relativa a: Tarek Abdelmoujoud Al Zumer

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. La fuente informa de que, en octubre de 1981, el Sr. Al Zumer, ingeniero agrícola de 49 años, fue detenido y acusado de conspiración en el caso del asesinato del Presidente Anwar Al-Sadat. En 1982, el Sr. Al Zumer fue condenado por el Tribunal Superior de Seguridad del Estado a una pena de prisión de 15 años.

4. La fuente señala que, varios meses después, el Sr. Al Zumer fue juzgado "por los mismos hechos" por un tribunal militar en El Cairo. El tribunal condenó al Sr. Al Zumer y le impuso una pena de prisión adicional de siete años. Las dos penas se acumularon.

5. Según la fuente, en octubre de 2003, tras haber cumplido ambas penas y permanecido 22 años preso en la cárcel de Limah Torah, al sur de El Cairo, las autoridades egipcias comunicaron al Sr. Al Zumer que no lo pondrían en libertad debido a la existencia de una decisión administrativa, emitida por el Ministro del Interior con arreglo a la Ley del estado de excepción de 6 de octubre de 1981, que prolongaba su encarcelamiento.

6. La fuente también señala que el Sr. Al Zumer recurrió la mencionada decisión del Ministro del Interior ante el Tribunal Superior Administrativo, quien aceptó su recurso y ordenó su puesta en libertad el 18 de mayo de 2004.

7. A pesar de la orden judicial, el Ministerio del Interior se opuso a la puesta en libertad del Sr. Al Zumer ejerciendo su derecho de veto. En virtud del artículo 3 de la Ley del estado de excepción, el Ministro del Interior, en su capacidad de representante del Presidente de la República, tiene amplios poderes, como el de dictar una orden de detención administrativa sin acusación ni juicio. El artículo 3 de la misma ley también establece que el Ministro del Interior puede ordenar la detención de todo sospechoso o toda persona que amenace la seguridad o el orden públicos. Ni la fiscalía ni ninguna otra autoridad judicial tienen derecho a intervenir en las decisiones de detención administrativa ni a controlarlas.

8. La fuente señala que el Sr. Al Zumer presentó solicitudes de puesta en libertad en varias ocasiones, y que las autoridades judiciales dictaminaron su puesta en libertad en todas ellas. La fuente sostiene que el Ministerio del Interior ha rehusado cumplir esas decisiones sistemáticamente, escudándose cada vez en una nueva orden administrativa para ampliar el período de detención.

9. La fuente aduce que el Sr. Al Zumer está siendo privado de libertad en violación de los artículos 9 2) y 14 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Además, la fuente hace referencia al hecho de que el Sr. Al Zumer fue juzgado y condenado dos veces por los mismos hechos, por jurisdicciones diferentes, el Tribunal Superior de Seguridad del Estado y un tribunal militar en El Cairo, aunque no era miembro de las fuerzas armadas. Las autoridades impusieron al Sr. Al Zumer dos penas que se acumularon. La fuente sostiene que la segunda condena del Sr. Al Zumer violó el principio

de cosa juzgada que figura en el artículo 14 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

11. En vista de lo anterior, la fuente alega que la detención continuada del Sr. Al Zumer es arbitraria porque carece de todo fundamento jurídico desde octubre de 2003 y viola el principio de cosa juzgada.

Respuesta del Gobierno

12. En su carta de 28 de abril de 2011, el Gobierno informó al Grupo de Trabajo de que el Sr. Al Zumer había sido puesto en libertad el 10 de marzo de 2011.

13. La fuente confirmó la puesta en libertad del Sr. Al Zumer.

14. Sin embargo, la fuente alega que la privación de libertad del Sr. Al Zumer es un caso especialmente grave, habida cuenta de la duración del encarcelamiento del Sr. Al Zumer, de las numerosas violaciones que ha sufrido y del flagrante incumplimiento por el Ministerio del Interior de los fallos judiciales en su favor. Por consiguiente, la fuente mantiene su petición de que el Grupo de Trabajo emita una opinión sobre el carácter arbitrario de la detención del Sr. Al Zumer, de conformidad con el artículo 17 a) de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

Deliberaciones

15. El Grupo de Trabajo reitera sus consideraciones anteriores sobre casos similares de detención en Egipto (como las recogidas en sus opiniones N° 27/2008 y N° 3/2007, así como los dictámenes del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la situación causada por la declaración del estado de excepción en Egipto desde el 6 de octubre de 1981 (véanse CAT/C/CR/29/4, párr. 5, y E/C.12/1/Add.44, párr. 10).

16. En particular, el Grupo de Trabajo, en su opinión N° 27/2008, párr. 82, recordó que, conforme a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Esta disposición debe interpretarse en el sentido de que si esa autoridad judicial independiente e imparcial decide que una orden emitida por una autoridad administrativa no es adecuada, las personas detenidas deben ser inmediatamente puestas en libertad. La posterior detención de estos individuos por los mismos cargos por las autoridades administrativas carecerá de fundamento jurídico y constituirá un incumplimiento de la orden judicial.

17. El Grupo de Trabajo también coincide con la posición adoptada por el Comité de Derechos Humanos en su Observación general N° 29 (2001), en que los principios de legalidad y del Estado de derecho exigen que los requisitos fundamentales del derecho a un juicio imparcial se respeten durante un estado de excepción y que, a fin de proteger los derechos que no pueden ser objeto de suspensión, el derecho de acceso a los tribunales, para que estos decidan sin demora sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe ser afectado por una decisión del Estado parte de suspender ciertas garantías del Pacto. Ello implica que, incluso en un estado de excepción, el Gobierno tiene la obligación de cumplir las órdenes de puesta en libertad dictadas por tribunales competentes para ejercer el control de la legalidad de la privación de libertad.

18. En su opinión N° 21/2007, párr. 19, así como en ocasiones anteriores (opinión N° 5/2005 (Egipto), párr. 19; decisión N° 45/1995 (Egipto), párr. 6; y decisión N° 61/1993 (Egipto), párr. 6), el Grupo de Trabajo consideró que el mantenimiento de una persona en detención administrativa después de que el tribunal competente para ejercer el control de la legalidad de la detención hubiera ordenado su puesta en libertad convertía en arbitraria la privación de libertad.

19. El Grupo de Trabajo reitera su opinión de que en esos casos no puede invocarse ningún fundamento legal para justificar la detención, y menos aún una orden administrativa dictada para eludir una decisión judicial por la que se ordena la puesta en libertad.

20. En el presente caso, a pesar de la orden judicial de 18 de mayo de 2004 que exigía la puesta en libertad del Sr. Al Zumer, este permaneció encarcelado en cumplimiento de órdenes administrativas emitidas por el Ministerio del Interior. El Grupo de Trabajo considera que el mantenimiento de una persona en detención administrativa después de que el tribunal competente para ejercer el control de la legalidad de la detención haya ordenado su puesta en libertad convierte en arbitraria la privación de libertad. La detención arbitraria contraviene lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, el presente caso se inscribe en la categoría I aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

21. Por lo que respecta a la violación del principio de cosa juzgada, el Grupo de Trabajo no dispone de suficiente información para emitir una opinión acerca de la legalidad de la segunda condena del Sr. Al Zumer, dictada en 1982. En particular, no está claro si la primera condena ya era definitiva cuando el Sr. Al Zumer fue juzgado y condenado de nuevo. Además, si bien el artículo 14 7) del Pacto prohíbe la sanción de una persona por un delito por el cual ya ha sido condenada por una sentencia firme, las normas internacionales de derechos humanos no prohíben la acumulación de penas. Puede ser permisible, bajo determinadas circunstancias, que se dicten varias condenas penales con arreglo a diferentes disposiciones legales por la misma conducta (por ejemplo, en el caso de que cada delito sancionado contenga un elemento materialmente único que no figure en los demás).

Decisión

22. Habida cuenta de que el Sr. Al Zumer fue puesto en libertad el 10 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, decide archivar el caso. Sin embargo, con arreglo a ese párrafo, aunque la persona en cuestión haya sido puesta en libertad, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión, según el caso, sobre si la privación de libertad fue o no arbitraria.

23. En el presente caso, a pesar de la puesta en libertad del Sr. Al Zumer, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Al Zumer fue arbitraria, por cuanto contravino lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría I de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Egipto que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al Zumer, de modo que esté en consonancia con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Al Zumer el derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

26. Puesto que es el estado de excepción lo que confiere al Ministerio del Interior amplios poderes para suspender derechos fundamentales, como la capacidad de detener a personas por tiempo indefinido sin acusación ni juicio, el Grupo de Trabajo recuerda que, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Humanos recomendó a Egipto que levantara su estado de excepción permanente. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno de Egipto a que considere la posibilidad de derogar su Ley del estado de excepción.

[Aprobada el 3 de mayo de 2011.]
